EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2374/011, de fecha 28 de junio 2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Víctor Jacobo Vázquez Cerda y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, relativa a reformar las fracciones I y II del artículo 231, del Código Penal para el Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que:

- “ En nuestro Código Penal para el Estado de Colima, dentro del Capitulo II del Título VII, se tipifica en el artículo 230 la figura delictiva denominada Abuso de Confianza, el cual, a la letra dice:
- *Artículo 230.- Al que con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro, de cualquier mueble ajeno de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le impondrán de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta por 45 unidades.*
- El abuso de confianza que configura la conducta delictiva surge porque existe entre ambas partes una relación jurídica que las vincula y hace que en virtud de ella una debe confiar en que la otra cumplirá con las obligaciones impuestas en el acuerdo.
- La obligación que se genera en virtud del acuerdo es legal, lo que se configura como abuso de confianza y, por lo tanto, como figura delictiva, es el incumplimiento de la obligación futura, nacida de ese acuerdo legítimo.
- En ese mismo sentido, el artículo 231 del Código Penal, establece la equiparación al Abuso de Confianza, previsto y sancionado por el artículo en comento. En su momento surgió la necesidad de tipificar el delito equiparado al abuso de confianza y castigar aquellas conductas que burlaron o perjudicaron a otro que por inexperiencia, afecto, bondad excesiva o descuido confiaron en alguien transmitiéndole la tenencia y no el dominio de una cosa mueble, pero por esa posesión que le concedieron, la persona dispone para sí o para otro de dicho bien mueble, sin tener derecho de hacerlo.
- El cual, al texto dice que:

- **ARTICULO 231.-** *Se equipara al abuso de confianza y se sancionará con las mismas penas, al que:*
 - *I.- Disponga de una cosa mueble de su propiedad, si no tiene la libre disposición de la misma en virtud de cualquier título legítimo; y*
 - *II.- En plazo prudente y después de ser requerido formalmente no devuelva la cosa mueble retenida ilegalmente o no la entregue a la autoridad para que ésta disponga de la misma conforme a la ley.*
- No obstante, en su momento, cuando el legislador creó el precepto en comento, colocó la conjunción copulativa “y” entre las fracciones I y II del mencionado artículo del Código Penal, lo que significa que ambas fracciones forman un todo, esto es, un solo tipo penal, dado que las conjunciones copulativas sirven para reunir en una sola unidad funcional dos o más elementos homogéneos e indican su adición; sin embargo, conforme a criterios emitidos por autoridades jurisdiccionales federales, es claro que el contenido de las fracciones del artículo 231 del Código Penal sustantivo en comento, se refieren a diversas hipótesis delictivas, motivo por el cual no es correcto utilizar la conjunción copulativa “y” entre éstas fracciones, porque se está obligando a la autoridad ministerial a integrarlas durante la Averiguación Previa como si ambas formaran una sola conducta delictiva, lo que trae como consecuencia que los probables responsables se sustraigan con facilidad del ejercicio de la acción penal, ante la imposibilidad de la autoridad ministerial competente para integrar los elementos del tipo penal.
- De lo anterior se puede determinar que en los términos en como se encuentra redactado actualmente, se integra por los siguientes elementos:
 - a) Que el sujeto activo disponga de una cosa mueble.
 - b) Que dicha cosa mueble sea de su propiedad.
 - c) Que el sujeto no pueda disponer de la misma en virtud de cualquier título legítimo.
 - d) Que en plazo prudente y después de ser requerido formalmente no devuelva la cosa mueble retenida ilegalmente o no la entregue a la autoridad para que ésta disponga de la misma, conforme a la ley.
- En referencia con lo anterior, no pueden considerarse cada una de las hipótesis contenidas en el artículo 231 del Código Penal vigente de la entidad en forma aislada por la autoridad ministerial en su integración y mucho menos por la autoridad jurisdiccional en la impartición de justicia, dado que lo correcto sería utilizar entre ambas fracciones del artículo en comento, la conjunción disyuntiva “o”, la cual denota diferencia, separación o alternativa.
- Por ello, se propone se reforme el citado precepto 231 del ordenamiento penal sustantivo, a efecto de que entre sus fracciones primera y segunda, se sustituya la

conjunción copulativa “y” por la conjunción disyuntiva “o”, que como ya se dijo, denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas, para que se indique claramente que las fracciones contenidas en el artículo 231 en comento son distintas e integran hipótesis diversas, siendo así como deben aplicarse en la vida práctica.

- Igualmente, en la fracción II del artículo 231 del Código Penal estatal, la expresión contenida en ésta: “requerido formalmente”, es un concepto amplio, que en determinadas circunstancias deja en estado de indefensión al imputado, siendo que abarca diversos supuestos que pueden acontecer al realizar dicho requerimiento, quedando al arbitrio e interpretación del juzgador, determinar si ese requerimiento fue “formal”, situación que va en detrimento de la correcta impartición de justicia.
- Esto es así porque un requerimiento formal puede efectuarse en presencia de dos testigos idóneos, ante fedatario público o bien, ante autoridad jurisdiccional competente, no obstante, tal requerimiento, cuando el sujeto activo siga reteniendo la cosa que tiene obligación de devolver, por el solo hecho de no devolverla en tiempo prudente se integrará a plenitud los elementos del cuerpo del delito de equiparación de abuso de confianza, tipificado en la fracción II del artículo 231 del Código Penal local. Lo que para efectos de interpretación de la fracción en comento, conlleva a que se violen las garantías de legalidad y audiencia que tutelan los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, toda vez que conforme a dichas garantías, a todo requerido le asiste el derecho de conocer en el acto de la diligencia el motivo o circunstancia por la que se le requiere.
- Sin embargo, al establecerse actualmente de manera amplia, en la fracción II del artículo de referencia, que basta de un requerimiento formal, se deja en estado de indefensión al imputado, pues ese elemento constitutivo del delito abarca diversos supuestos que pueden acontecer al hacer dicho requerimiento.
- En consecuencia, se propone reformar la fracción II del artículo 231 multicitado con la finalidad de evitar se comenten fraudes a la ley, en este caso, al Código Penal para el Estado de Colima, siendo que la fracción que se propone reformar es ambigua en su redacción y da pie a que se viole el principio constitucional de igualdad de las partes ante la ley, así como la garantía de debida defensa, consagradas en nuestra Constitución Federal, por lo que con dicha modificación se plantea que el requerimiento formal sea realizado por la autoridad jurisdiccional”.

TERCERO.- Que mediante oficio número 2415/011, de fecha 19 de julio de 2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado José Manuel Romero Coello y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza,

relativa a reformar las fracciones VIII, IX y adicionar la fracción X del inciso B), del artículo 227, del Código Penal para el Estado de Colima.

CUARTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que:

- “El delito de robo, que se encuentra tipificado en el artículo 226 del Código Penal vigente en nuestro estado, conceptualiza al delito como el apoderamiento de una cosa mueble ajena, sin el consentimiento de quien pudiera otorgarlo conforme a la Ley, argumentándose con el presente concepto el robo simple, el cual se complementa como calificado en su posterior artículo a través de dos incisos y sus respectivas fracciones.
- En este mismo contexto es del conocimiento de toda la ciudadanía que nuestro país vive actualmente una situación complicada en el ámbito de seguridad pública, situación que ha provocado que el Congreso de la Unión en su respectivo ámbito de competencia, así como las Legislaturas Estatales produzcan nuevas leyes y reformas a las ya existentes, en las cuales se garantice a la población el goce de sus derechos fundamentales, tal es el caso de nuestro estado, en el cual en los últimos meses nuestro Código Penal vigente ha sufrido variadas reformas y adiciones por parte de la presente legislatura, con el fin de adecuar el marco jurídico existente al momento actual en el que vivimos.
- En tal tesitura, y en lo que refiere a nuestro Estado, se ha registrado de manera desmedida el robo concerniente a piezas de cobre, aluminio y otros metales aleados, como cables, tapas, conectores y medidores, así como de otros elementos utilizados para el riego agrícola. La alta incidencia de este delito se debe, en gran parte, al alto valor y la cuantiosa ganancia que representa para los hurtadores la comercialización de estos productos, tan solo del mes de noviembre del año 2010 a la fecha, la Procuraduría General de Justicia para el Estado de Colima ha registrado 58 indagatorias; lo anterior ha venido afectando gravemente a colonos, empresarios y agricultores, ocasionando con estos actos un daño colateral a la comunidad en general.
- Por ello es dable mencionar que el daño causado por el apoderamiento de este tipo de bienes, puede ser visto desde dos perspectivas; la primera, relacionada con el *daño material* que ocasiona la comisión del ilícito lo cual su valor es calculado por el monto y la cuantía de lo apoderado; la segunda, de acuerdo al daño ocasionado a los intereses colectivos, por el menoscabo de la prestación de un servicio público, el cual debe ser calculado de acuerdo a su valor intrínseco o de *utilidad pública*.
- Ahora bien, respecto del caso que nos ocupa (*robo de cobre y otros metales*) en efecto, por un lado, el delito como tal no se contempla, sino que es considerado como un delito simple (Robo simple), toda vez que no se encuadra en ninguna de las calificativas previstas por el artículo 227 del código penal, situación por la cual se pretende adicionar una fracción mas al inciso B) del artículo citado; y, por otro lado, castigar no solo al que sustraiga o se apodere ilícitamente de los bienes señalados,

sino también a quien comercialice estos materiales obtenidos de manera ilegal o a quien lo tenga en su poder, mientras que si en estos actos participa un servidor público, se le aumentará la pena hasta una mitad más y se le inhabilitará 06 (seis) años para ocupar cargos públicos.

- Cabe destacar, que en el contexto de la iniciativa que nos ocupa, la comisión dictaminadora no debe perder de vista que la consecuencia de la adición en cuestión traerá como resultado, en perjuicio del presunto inculpado, la no garantía de la libertad bajo caución ni la sustitución de la pena en la sentencia.
- Así las cosas y haciendo uso del derecho comparado, legislaciones penales de los Estados de Jalisco, Coahuila, Nuevo León y Tabasco, han establecido en sus códigos penales como agravante el robo de cualquier componente o implemento utilizados en la prestación de algún servicio público, tales como alumbrado público, energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, telecomunicaciones, gas natural, o señalización vial, que estén bajo la salvaguarda pública, situación que tuvo como producto el fortalecimiento y la certeza jurídica de los ciudadanos de dichas entidades federativas.
- En el contexto general, cabe reflexionar que el derecho en general, tiene como finalidad encauzar la conducta humana para hacer posible la vida integral, éste se manifiesta como un conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hombres en sociedad, las cuales pueden imponer a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza de que dispone el Estado; así también se ha expresado que el derecho no es sino la sistematización del ejercicio del poder coactivo del Estado, sin dudar que la sistematización está inspirada en ideas del más alto valor ético y cultural para realizar su fin primordial, de carácter mediato: la paz y seguridad sociales.
- Por tales circunstancias y con el objeto de evitar serios daños tanto al patrimonio familiar, industrial y en mayor medida a la infraestructura urbana, dejando sin alumbrado público a cientos o quizás miles de ciudadanos, con el consabido riesgo e inseguridad, así como también acabar con la impunidad con la que se manejan los vendedores y compradores de esos materiales de procedencia ilícita es que exhibimos la iniciativa que nos ocupa a fin de otorgar mayor certeza jurídica y social a la población en general”.

QUINTO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber hecho el estudio y análisis correspondiente de las iniciativas que se dictaminan, relativas a reformar, la primera, las fracciones I y II del artículo 231 y, la segunda, reformar las fracciones VIII, IX y adicionar la fracción X del inciso B), del artículo 227, ambas del Código Penal para el Estado de Colima, determina que es de gran relevancia jurídica y social para los colimenses las iniciativas en comento, a efecto de que éstos cuenten con ordenamientos jurídicos acordes a las necesidades que se demandan en la actualidad, a efecto de salvaguardar los intereses de la sociedad.

En consecuencia, es que esta Comisión las dictamina a favor con sus respectivas modificaciones, en particular con relación a la segunda iniciativa, en términos de los siguientes argumentos:

A) Es sumamente importante la iniciativa relativa a reformar las fracciones I y II del artículo 231 del Código Penal para el Estado de Colima, en razón de que busca otorgarle mayor claridad a las hipótesis contenidas en las fracciones en comento, a efecto de evitar se cometan en la práctica violaciones a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y, debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en perjuicio del inculpaado.

La presente propuesta de reforma a la fracción I, resulta necesaria en razón de que así como lo argumenta su iniciador, efectivamente, la existencia de la conjunción copulativa “y” en la fracción en comento, denota que forma un todo con la fracción II del mismo artículo 231 del Código Penal, lo que significa que las hipótesis contenidas en ambas fracciones, forman un solo tipo penal, en razón de que las conjunciones copulativas sirven para reunir en una sola unidad funcional dos o más elementos homogéneos e indican su adición.

Al respecto, es correcta la propuesta de reforma que se dictamina de sustituir la conjunción copulativa “y” de la fracción I del artículo 231, por la conjunción disyuntiva “o”, que denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas, a efecto de que se indique claramente que las fracciones primera y segunda del artículo en comento son distintas e integran hipótesis normativas diferentes y, así se evite la confusión e inexacta aplicación de la ley que en la práctica se puedan presentar.

Igualmente, la propuesta de reforma a la fracción II del artículo 231 del multicitado Código Penal sustantivo, se determina viable por esta Comisión, en razón de que, así como lo indica su iniciador, efectivamente, la expresión “requerido formalmente”, es un concepto amplio que en determinadas circunstancias deja en estado de indefensión al imputado, siendo que abarca diversos supuestos que pueden acontecer al realizarse dicho requerimiento, quedando al arbitrio e interpretación del juzgador determinar si ese requerimiento fue “formal”, situación que va en detrimento de la correcta impartición de justicia.

Con relación a lo anterior, un requerimiento formal se cumple con la presencia de dos testigos, ante fedatario público o bien, ante autoridad jurisdiccional competente, situación que en su momento se puedan violar garantías individuales al requerido, dado que en todo momento le asiste el derecho de conocer en el acto de la diligencia el motivo o circunstancia por las que se le requiere y, en caso de negarse a devolver la cosa retenida, exponer las razones en que sustenta su proceder, así como exhibir las pruebas que apoyen o sustenten su negativa, a efecto de que, en caso de un futuro procedimiento instaurado en su contra por no devolver lo que le fue requerido, en su oportunidad el juez del proceso, con vista de esas pruebas y en las que obren el sumario, esté en aptitud de decidir con justicia sobre la procedencia o improcedencia de la causa penal instaurada.

Es por ello, que es dable reformar la fracción en comento, para que el “requerimiento formal” contenido en ésta, a determinada persona, con la finalidad de que haga la entrega de un bien, sea efectuado únicamente por una autoridad jurisdiccional; dado que como se

encuentra redactada actualmente, provoca que la justicia no sea igual para todos, siendo que se sanciona tal conducta, dependiendo del criterio discrecional del juzgador que conozca del caso; lo que daría lugar a que en un supuesto idéntico, se pueda ser culpable o inocente, pues como ya se mencionó, queda al arbitrio del que resuelve, condenar o no, la conducta tipificada en la fracción II del artículo 231 del Código Penal para el Estado de Colima.

B) En cuanto a la segunda iniciativa que se dictamina de manera conjunta, relativa a reformar las fracciones VIII, IX y adicionar la fracción X del inciso B), del artículo 227, del Código Penal para el Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora comulga con la intención del autor de la iniciativa de tipificar de manera específica el delito de robo de cobre o cualquier otro metal, considerándolo, además, como delito grave, dado que en nuestro Estado, así como lo manifiesta el propio iniciador, se ha incrementado de manera significativa el robo concerniente a piezas de cobre, aluminio y otros metales aleados, como cables, tapas, conectores y medidores, así como otros elementos utilizados en la industria o la agricultura, en razón de que a los hurtadores les representa una gran ganancia en la comercialización de estos artículos y productos.

La alta incidencia de esta conducta ilícita en nuestro Estado en los últimos meses ha afectado, como consecuencia de ello, la prestación de algunos servicios públicos por parte del gobierno del Estado y los municipios a la población, dado que los hurtadores, al ejecutar tales conductas, obstruyen la prestación y el disfrute de estos servicios, dañando y menoscabando así el patrimonio público.

Igualmente, afecta el patrimonio y economía de las familias, empresas e industrias colimenses, ya que al momento de ser objeto del robo de cobre o cualquier otro metal de su propiedad, se ven en la necesidad de adquirirlo nuevamente en razón de la gran utilidad que les brinda en el funcionamiento de las viviendas e instalaciones de las empresas e industrias.

Sin embargo, esta Comisión, después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente, determina que respecto a esta iniciativa no es correcto ni adecuado realizar la adición de la fracción X al artículo 227 del Código Penal como lo propone su iniciador, toda vez que, a su juicio, se requieren hacer precisiones, *por un lado*, en relación a diversas conductas o actividades sancionables que se realicen con posterioridad al delito de robo de cobre o algún otro metal, teniendo su autor conocimiento del citado ilícito y, *por otro*, de técnica legislativa; motivo por el cual, en uso de la facultad concedida por el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión plantea reubicar la hipótesis penal que se propone tipificar como grave, mediante la adición de tres nuevos artículos, consistentes en el 227 Bis 3, 227 Bis 4 y 227 Bis 5 al propio ordenamiento penal sustantivo, mismos que se plantean incluir en el artículo 10 del Código Penal, precisamente para calificarlos como delitos graves, como a continuación se describen.

Se propone tipificar el apoderamiento ilegal de cobre o algún otro metal utilizado en instalaciones eléctricas, hidráulicas, telecomunicaciones, agua potable, gas, drenajes, partes de equipamiento urbano, industrial o agrícola, mediante la adición del artículo 227 Bis 3, conducta que será sancionada de cinco a quince años de prisión y multa hasta por ochenta y cinco unidades; incrementándose en un tercio más respecto de la pena anterior, cuando la conducta ilícita se realice en circunstancias especiales que se prevén en las fracciones IV, V,

VI, VII y VIII del inciso B) del artículo 227, que son: cuando el sujeto activo aproveche las condiciones de confusión por catástrofe o desorden público; cuando se cometan por una o varias personas armadas; cuando el agente se valga de identificaciones falsas o supuestas ordenes de autoridad; si se ejerce violencia en las personas o en las cosas, aun cuando sea para facilitar la fuga o defender lo robado y se realice en paraje solitario o lugar desprotegido, respectivamente.

Con la adición del artículo 227 Bis 4, se propone incluir en este precepto la sanción a quienes realicen conductas derivadas de la comercialización, enajenación, suministro, tráfico, detención, posesión, custodia, adquisición o traslado de cobre o algún otro metal robado o, en su caso, aporten recursos económicos o proporcionen medios para llevar a cabo tales actividades; por lo que, quienes participen en estas conductas teniendo conocimiento de la comisión de la hipótesis propuesta en el artículo 227 Bis 3, se les impondrá, adicionalmente a las penas que les corresponda por la comisión de otros delitos, de cinco a quince años de prisión y multa hasta por ochenta y cinco unidades.

Por último, con la adición del artículo 227 Bis 5, se propone sancionar a los servidores públicos cuando participen en las conductas previstas de los artículos 227 Bis 3 y 227 Bis 4, en tales supuestos a la sanción que corresponda conforme a dichos preceptos, se le aumentará en una mitad más y, además, se le aplicará la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Con tales propuestas de adición se pretende contribuir en la disminución del ilícito de que se trata, advirtiendo a los posibles hurtadores que de cometer el delito de robo de cobre o algún otro metal en los términos señalados, no tendrán derecho a obtener la libertad bajo caución, en razón de que se propone tipificar tal conducta como delito grave en el artículo 10 del Código Penal estatal, con la firme intención de que su comisión disminuya y no se afecte más el patrimonio de las familias colimenses, las industrias y empresas, así como el patrimonio del propio gobierno del Estado y los municipios de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente

D E C R E T O No. 353

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones I y II del artículo 231, del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 231.- Se equipara al abuso de confianza y se sancionará con las mismas penas, al que:

- I.- Disponga de una cosa mueble de su propiedad, si no tiene la libre disposición de la misma en virtud de cualquier título legítimo; o
- II.- En plazo prudente y después de ser requerido formalmente por autoridad judicial, no devuelva la cosa mueble retenida ilegalmente o no la entregue a la autoridad para que ésta disponga de la misma conforme a la ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 10 y se adicionan los artículos 227 Bis 3, 227 Bis 4 y 227 Bis 5, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 10.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los siguientes delitos previstos por este Código: REBELIÓN tipificado por el artículo 104; TERRORISMO conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 106 BIS; los supuestos previstos por el artículo 108; USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ASÍ COMO LAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO tipificado por el artículo 115 BIS, FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD establecido por el artículo 117; EVASIÓN DE PRESOS conforme al segundo párrafo del artículo 121; PECULADO tipificado por el artículo 131; DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y LOS MEDIOS DE TRANSPORTE establecidos en el segundo párrafo del artículo 145; CORRUPCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS señalados en el segundo y tercer párrafo del artículo 154; PORNOGRAFÍA mencionada en el artículo 157 BIS 2; TURISMO SEXUAL, en los términos de los numerales 157 BIS 6 y 157 BIS 7; LENOCINIO en los términos del segundo párrafo del artículo 158 y el numeral 159; TRATA DE PERSONAS en el artículo 161; HOMICIDIO tipificado por los artículos 169, 170, 171, 172 tratándose del provocador, y las fracciones II y III del 173; LESIONES conforme los artículos 174 fracciones VI y VII, 175, 176, 177, 178, 179 y 183; HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS previstas en el artículo 184 BIS; PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD previsto por el artículo 197; SECUESTRO previsto por el artículo 199, respectivamente; VIOLACIÓN en todas sus formas y modalidades que comprenden los artículos 206, 207, 208, 209, y 210; Abuso Sexual, en lo previsto en el segundo párrafo del artículo 215; ROBO respecto de los supuestos del inciso B) del artículo 227, 227 BIS, 227 BIS 1, 227 BIS 2, 227 BIS 3, 227 BIS 4, 227 BIS 5; los FRAUDES ESPECÍFICOS previstos en las fracciones III, IV, V Y VI del artículo 234; DAÑOS tipificado por el artículo 238. Igualmente se consideran graves los delitos de Tentativa de Homicidio y Secuestro, así como la Tentativa de Robo previsto por el inciso b) del artículo 227 y la Tentativa de Violación previsto por los artículos 206, 207, 208, 209 Y 210 así como los DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, previstos por los artículos 243 en su segundo párrafo y la fracción III del 244.

ARTÍCULO 227 Bis 3.- Al que se apodere ilegalmente de cobre o algún otro metal utilizado en instalaciones eléctricas, hidráulicas, telecomunicaciones, agua potable, gas, drenajes, partes de equipamiento urbano, industrial o agrícola; se le impondrá de cinco a quince años de prisión y multa hasta por ochenta y cinco unidades.

Cuando la sustracción o apoderamiento de cobre o algún otro metal, se realice conforme a las hipótesis establecidas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del inciso B) del artículo 227, la pena prevista en el párrafo anterior aumentará en un tercio más.

ARTÍCULO 227 Bis 4.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y multa hasta por ochenta y cinco unidades, al que teniendo conocimiento de robo de cobre o algún otro metal utilizado en términos de lo dispuesto por el artículo anterior y, con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos:

- I. Comercialice cobre o algún otro metal robado;
- II. Enajene, suministre o trafique de cualquier manera con cobre o cualquier otro metal robado;
- III. Detente, posea, custodie o adquiera cobre o algún otro metal robado o que, por su forma de adquisición, se advierta su origen ilegal;
- IV. Traslade el cobre o cualquier otro metal robado de un lugar a otro dentro del estado o a otra entidad federativa; o
- V. Aporte recursos económicos o proporcione medios de cualquier especie, para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores.

ARTÍCULO 227 Bis 5.- Si en los actos o conductas previstas en los artículos 227 Bis 3 y 227 Bis 4, participa algún servidor público, a la sanción que corresponda conforme a dichos preceptos, se le aumentará en una mitad más y, además, se le aplicará la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima.

El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y observe.”

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil once.

C. VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA
DIPUTADO PRESIDENTE

C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS
DIPUTADO SECRETARIO

C. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO SECRETARIO